Consejo Económico y Social

22 de mayo de 2019
Español

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

28° período de sesiones

Viena, 20 a 24 de mayo de 2019

Tema 6 del programa

**Integración y coordinación de los esfuerzos de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito y de los Estados Miembros en la esfera
de la prevención del delito y la justicia penal**

Belarús, El Salvador, Filipinas y Kazajstán: proyecto de resolución revisado

Fortalecimiento de la implicación de todos los miembros de la sociedad en la prevención del delito

La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal,

Reafirmando su profunda preocupación por los efectos de la delincuencia, en particular la delincuencia organizada transnacional, en la seguridad y en la estabilidad y el desarrollo políticos, sociales y económicos de los Estados y las sociedades,

Teniendo presente que los Gobiernos tienen una función de liderazgo en la elaboración de estrategias, políticas y programas de prevención del delito y en el mantenimiento de marcos institucionales para su aplicación y examen,

Reconociendo que las medidas de prevención del delito eficaces y debidamente aplicadas no solo previenen la delincuencia y la victimización, sino que también promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible de los países,

Reconociendo también que la prevención del delito por lo general comprende estrategias, políticas y programas que tienen por objeto reducir tanto el riesgo de que se produzcan delitos como los posibles efectos perjudiciales de la delincuencia para las personas y la sociedad,

Afirmando que, cuando proceda, las medidas nacionales de prevención del delito deberían tener en cuenta los vínculos entre la delincuencia local y la delincuencia organizada transnacional,

Recordando todas las resoluciones de las Naciones Unidas que tratan el tema de la prevención del delito,

Reafirmando la necesidad de que se prevenga y se combata la delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y manifestaciones existentes y emergentes y de que los Estados partes cumplan de manera efectiva con las obligaciones que les incumben en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Transnacional y sus Protocolos¹, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción² y otros instrumentos internacionales pertinentes,

Recordando en particular el artículo 31 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, relativo a las medidas destinadas a prevenir la delincuencia organizada transnacional,

Observando la importancia de tener en cuenta, cuando corresponda, las directrices de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y otras reglas y normas internacionales pertinentes, en particular las directrices para la prevención de la delincuencia urbana³ y las directrices para la prevención del delito⁴, al elaborar las políticas nacionales de prevención del delito,

Recordando también el documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015, titulado “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”⁵,

Recordando la resolución 73/183 de la Asamblea General, titulada “Refuerzo del papel de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en la contribución a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”,

Reconociendo la importancia de promover el desarrollo sostenible como complemento de las estrategias, las políticas y los programas de prevención del delito,

Teniendo presentes los compromisos contraídos por los Estados Miembros que se enuncian en el párrafo 7 de la Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal en el Marco Más Amplio del Programa de las Naciones Unidas para Abordar los Problemas Sociales y Económicos y Promover el Estado de Derecho a Nivel Nacional e Internacional y la Participación Pública, aprobada en el 13^{er} Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal⁶, relacionados con la prevención del delito, en particular el compromiso de procurar crear un entorno de aprendizaje seguro y positivo en las escuelas, con el apoyo de la comunidad, y de incorporar la prevención del delito en los sistemas educativos y en los programas sociales y económicos pertinentes, en particular los que afectan a la juventud,

Acogiendo con beneplácito la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con arreglo a su mandato, en el ámbito de la prevención del delito, que incluye la elaboración de herramientas técnicas y la prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros que la solicitan, así como su continua labor destinada a mejorar las estrategias, políticas y programas que han demostrado ser eficaces, incluida la que realiza en colaboración con las entidades pertinentes de las Naciones Unidas,

Acogiendo con beneplácito también los esfuerzos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por ampliar y facilitar la ejecución de su programa de preparación para la vida destinado a entornos deportivos, llamado “Juega, vive”, que tiene por objeto prevenir la delincuencia, la violencia y el consumo de drogas, así como su programa “Familias Fuertes”,

Reconociendo la diversidad de enfoques de la prevención del delito, como los basados en el desarrollo, en la comunidad y en la prevención de situaciones propicias al delito, y destacando la importancia de intercambiar conocimientos y poner en común prácticas de eficacia demostrada a nivel nacional y entre países en desarrollo, países desarrollados y países con economías en transición,

Reconociendo también que las estrategias, las políticas y los programas de prevención del delito amplios y eficaces pueden reducir considerablemente la

¹ Naciones Unidas, *Treaty Series*, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, núm. 39574.

² Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 2349, núm. 42146.

³ Resolución 1995/9 del Consejo Económico y Social, anexo.

⁴ Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social, anexo.

⁵ Resolución 70/1 de la Asamblea General.

⁶ Resolución 70/174 de la Asamblea General, anexo.

delincuencia y la victimización, ya que abordan las causas fundamentales y los factores de riesgo de la delincuencia y la victimización, y pueden reducir en gran medida los costos financieros y sociales de la delincuencia,

Reconociendo la responsabilidad de los Estados Miembros de elaborar estrategias, políticas y programas de prevención del delito y crear y mantener marcos institucionales para su aplicación, seguimiento y evaluación, y observando al mismo tiempo que esa labor debería basarse en un enfoque participativo, de colaboración e integrado que comprenda a todas las partes interesadas pertinentes,

Poniendo de relieve la necesidad de establecer las alianzas necesarias con todas las partes interesadas pertinentes en el proceso de formulación de estrategias, políticas y programas de prevención del delito eficaces,

Destacando la importancia de intensificar las iniciativas y medidas de prevención del delito orientadas a las familias, las escuelas, las instituciones religiosas y culturales, las organizaciones comunitarias y el sector privado y que aprovechen todo su potencial a fin de combatir los problemas sociales y económicos que son las causas profundas de la delincuencia,

Poniendo de relieve que la educación para todos los niños y jóvenes, incluida la erradicación del analfabetismo, es fundamental para prevenir la delincuencia, y destacando a ese respecto la importante función que desempeña la participación de la juventud en las iniciativas de prevención del delito,

Acogiendo con beneplácito las iniciativas comunitarias que se han puesto en marcha para prevenir la delincuencia, incluidas las campañas de concienciación y la labor de apoyo a la reinserción social y la rehabilitación de los delincuentes,

Reconociendo la importancia de reforzar las alianzas entre los sectores público y privado en la prevención del delito mediante el intercambio de información, conocimientos y experiencias y la realización de acciones conjuntas y coordinadas, con el propósito, entre otros, de prevenir y combatir el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones con fines delictivos,

Observando la importancia de incorporar consideraciones relativas a la prevención del delito en todas las estrategias, políticas y programas sociales y económicos, incluidos los relativos al empleo, la educación, la salud, la vivienda y el urbanismo, la pobreza, la marginación social y la exclusión y los que hacen especial hincapié en las comunidades, las familias, la infancia y la juventud,

Reconociendo que las medidas de prevención del delito deberían concebirse y aplicarse de conformidad con el estado de derecho y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos,

Observando los progresos realizados por los Estados Miembros con miras a establecer políticas y programas eficaces de prevención de la delincuencia urbana, en particular en el contexto de la aplicación de la Nueva Agenda Urbana⁷, y alentando un mayor intercambio de experiencias,

Convencida de la necesidad de reforzar la cooperación local, regional e internacional para prevenir y combatir eficazmente las actividades delictivas, dondequiera que se lleven a cabo,

1. *Insta* a todos los Estados Miembros que no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos¹ y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción² o de adherirse a ellos, e insta a los Estados partes a que apliquen eficazmente sus disposiciones;

2. *Exhorta* a los Estados Miembros a que formulen políticas, estrategias y programas de prevención del delito que incluyan enfoques multidisciplinares y participativos de prevención e intervención tempranas, en estrecha cooperación con

⁷ Resolución 71/256 de la Asamblea General, anexo.

todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil, y solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que siga proporcionando asistencia técnica a los Estados Miembros que la soliciten a tal efecto;

3. *Alienta* a los Estados Miembros a que incorporen consideraciones de prevención del delito en sus planes nacionales destinados a aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible⁵ y en todas sus estrategias, políticas y programas sociales y económicos pertinentes, de acuerdo con sus leyes y prioridades nacionales, haciendo especial hincapié en las comunidades, las familias, la infancia y la juventud, a fin de hacer frente de manera eficaz a las condiciones que pueden propiciar la aparición de la delincuencia y la violencia;

4. *Exhorta* a los Estados Miembros a que adopten estrategias, políticas y programas eficaces de prevención del delito destinados a las mujeres, así como a los niños y a otros miembros vulnerables de la sociedad, en los que se incluyan medidas contra las agresiones sexuales, la explotación sexual, la trata de personas y los delitos relacionados con las drogas y otros delitos, y a que, con tal fin, promuevan las mejores prácticas, como, entre otras, el uso de la tecnología para apoyar la recuperación inmediata de niños perdidos, la prestación de asistencia jurídica y la protección de las familias frente a la violencia doméstica;

5. *Alienta también* a los Estados Miembros a que incorporen una perspectiva de género en sus estrategias, políticas y programas de prevención del delito, de modo que tengan en cuenta las necesidades y las perspectivas de las mujeres y las niñas, y alienta además a los Estados Miembros a que pidan a las mujeres y las niñas que contribuyan a la formulación, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de esas estrategias, políticas y programas, cuando proceda;

6. *Alienta* a los Estados Miembros a que estudien la posibilidad de adoptar en sus estrategias, políticas y programas de prevención del delito un enfoque que esté centrado en las víctimas y tenga en cuenta los traumas que estas hayan sufrido, y a que tengan en consideración las aportaciones de las víctimas al elaborar y llevar a la práctica esas iniciativas, cuando proceda;

7. *Alienta* a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que intensifique sus esfuerzos por apoyar a los Estados Miembros, con arreglo a su mandato y cuando se le solicite, en los ámbitos de la prevención del delito y de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, mediante programas eficaces de prevención del delito, incluidas iniciativas de prevención de delito a nivel local;

8. *Invita* a los Estados Miembros a que fomenten las alianzas con el sector privado y la colaboración con la sociedad civil en la prevención del delito, así como en los programas destinados a ayudar a las víctimas del delito y reducir la reincidencia, como los programas de inclusión social, los planes de empleo para los miembros vulnerables de la sociedad, como las víctimas y los exreclusos, y, cuando proceda, las medidas no privativas de libertad, de conformidad con sus marcos jurídicos nacionales;

9. *Invita también* a los Estados Miembros a que colaboren con la comunidad académica y la comunidad de investigación a fin de evaluar las repercusiones de las políticas, estrategias y programas de prevención del delito, teniendo en cuenta las aportaciones y las contribuciones de todas las partes interesadas;

10. *Alienta* a los Estados Miembros a que adopten las medidas pertinentes, de acuerdo con sus respectivos contextos nacionales, para promover la difusión, utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, incluido el estudio y, cuando lo consideren necesario, la divulgación de los manuales, textos y materiales de creación de capacidad ya existentes elaborados y publicados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;

11. *Alienta también* a los Estados Miembros a que procuren estrechar la coordinación y la cooperación entre las instituciones nacionales responsables de prevenir y combatir la delincuencia urbana y a que elaboren las medidas de prevención

necesarias que tengan en cuenta los vínculos entre la delincuencia urbana y todas las formas y manifestaciones de la delincuencia organizada en algunos países y regiones, como los delitos cometidos por bandas, a fin de abordar las repercusiones de la delincuencia urbana y la delincuencia relacionada con las bandas para la infancia y la juventud mediante políticas eficaces, con vistas a fomentar la inclusión social y las oportunidades de empleo y facilitar la reintegración social de la infancia y la juventud;

12. *Invita* al Secretario General a incluir información sobre la aplicación de la presente resolución en los informes que tiene la obligación de presentar a la Asamblea General en relación con el tema de la prevención del delito y la justicia penal;

13. *Invita* a los Estados Miembros y a otros donantes a aportar recursos extrapresupuestarios para los fines de la presente resolución, de conformidad con las normas y los procedimientos de las Naciones Unidas.